

Iberdrola en Brasil: impactos múltiples de una multinacional eléctrica

Iberdrola in Brazil: multiple impacts of an electric multinational

LUIS MIGUEL UHARTE POZAS

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

luismiguel.uharte@ehu.es

Abstract

This paper aims to carry out an analysis about the multiple impacts that business projects of Spanish electrical multinational Iberdrola are generating in Brazil. The methodology is based on the collection of documents from various sources (public and business institutions, researchers, social movements), and interviews with various social actors (affected, academics, technical...). The most important impacts are related to the loss of sovereignty, the commodification of public services, the practice of lobbying, corruption, social criminalization, job insecurity and violation of rights of indigenous peoples.

Key words: Iberdrola, electric multinational, multiple impacts, rights violations.

Resumen

El presente trabajo pretende realizar un análisis de los múltiples impactos que los proyectos empresariales de la multinacional eléctrica española Iberdrola están generando en Brasil. La metodología se sustenta en la recopilación de documentación de diversas fuentes (instituciones públicas y empresariales, investigadores, movimientos sociales), y en las entrevistas realizadas a diferentes agentes (afectados, académicos, técnicos, ...). Los impactos más destacados están relacionados con la pérdida de soberanía, la mercantilización de un servicio público, la práctica del *lobby*, la corrupción, la criminalización social, la precarización laboral y la vulneración de derechos de los pueblos indígenas.

Palabras clave: Iberdrola, multinacional eléctrica, impactos múltiples, vulneración de derechos.

1. Introducción

Este texto tiene como objetivo fundamental identificar los impactos múltiples que la multinacional española Iberdrola está provocando en Brasil, desde que se instaló en el país en la década del noventa, en el marco del proceso de privatización progresiva del sector eléctrico. La metodología para abordar el trabajo se sustenta por una parte, en la recopilación de documentación de diversas fuentes (organismos públicos, instituciones empresariales, investigadores y movimientos sociales), y por otra parte, en las entrevistas

que realizamos *in situ* durante el mes de abril de 2012 a diferentes agentes (afectados, académicos, técnicos, ...), tanto en São Paulo y Río de Janeiro, como en el nordeste del país, en el Estado de Pará, donde Iberdrola está participando en la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.

En el primer apartado se realiza una breve descripción general de la evolución del sector eléctrico en Brasil y del proceso de privatización abierto en los años noventa, además de identificar los principales negocios que Iberdrola tiene en el país. El siguiente apartado se ocupa de presentarnos los diversos impactos que generan las grandes corporaciones empresariales en diferentes ámbitos (político, económico, social, ambiental, cultural, ...).

La serie de impactos que presentamos será nuestra referencia de análisis para evaluar posteriormente los negocios de Iberdrola en Brasil. El apartado más extenso se ocupa de identificar los impactos más importantes que la multinacional eléctrica están generando con su práctica empresarial, destacándose entre otros la mercantilización de servicios públicos, la pérdida de soberanía, la práctica del lobby, la corrupción, el deterioro ambiental, la criminalización social, y la vulneración de derechos laborales, de comunidades y de pueblos indígenas. Finalmente, reservamos un último apartado a presentar una serie de conclusiones.

2. El sector eléctrico brasileño y la inserción de Iberdrola¹

La inserción en Brasil de Iberdrola y del resto del capital extranjero hay que enmarcarla dentro del cambio internacional que se produce con la sustitución progresiva de los modelos de corte más o menos estatista, por un nuevo modelo de esencia marcadamente privatizadora: el neoliberalismo. Al igual que ocurrirá prácticamente en el resto de América Latina, la oleada neoliberal traerá como consecuencia el fin del modelo desarrollista, que estaba vigente desde la década de los treinta. La vía para la imposición del neoliberalismo será la política de ajustes, que en el caso brasileño se iniciará a principios de los noventa, y que tendrá como uno de sus objetivos incrementar los niveles de rentabilidad del capital (Sastre, 2011: 7).

En los años noventa comienza el ciclo privatizador, que en un primer momento (de 1991 a 1994) se centrará en las empresas públicas del sector industrial, principalmente las pertenecientes al sector de «siderurgia, petroquímica y fertilizantes» y, posteriormente, desde 1995 en adelante, acometerá la venta de los servicios públicos (energía, telecomunicaciones, etc.) y de la banca (Sastre, 2011: 9-10).

Si pasamos a evaluar el sector eléctrico brasileño, es importante hacer una breve reseña de su evolución histórica, para poder comprender mejor su situación actual. La primera etapa, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, estuvo caracterizada por el control privado extranjero, a través de dos consorcios, Light (canadiense) y Amforp

1. Este apartado es una adaptación del subcapítulo titulado 'Capitalismo y sector eléctrico brasileño' del citado libro 'Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y en Brasil', escrito por Luis Miguel Uharte Pozas.

(estadounidense), que se repartían las zonas más rentables del país. Desde los años treinta, la naciente burguesía industrial en alianza con sectores militares comienza a poner las bases de un capitalismo nacional e impulsan proyectos energéticos estatales, aumentando de manera paulatina su peso en el sector: de un 6,8% en 1952 a un 31,3% en 1962 (Gonçalves, 2007: 188-189).

La segunda fase está marcada por la nacionalización del sector que impulsan los sectores desarrollistas. En 1960 se crea el Ministerio de Minas y Energía y en 1961 nace Eletrobrás, la empresa eléctrica estatal (MAB, 2010: 6). En la década del setenta Eletrobrás se fortalece con la articulación de las eléctricas públicas regionales: Eletrosul, Eletronorte, Chesf y Furnas (Sauer *et al.*, 2011: 10).

En el año 1995 tanto el gobierno central como los estatales inician el proceso de privatización del sistema eléctrico, abriendo las puertas a corporaciones multinacionales de Europa, Estados Unidos y América Latina y a privados brasileños. Entre 1995 y 2001, se privatizaron 19 empresas de distribución y 4 de generación, «lo que significa la transferencia de más del 50% del sector de la distribución a la iniciativa privada» (MAB, 2010: 8). Paralelamente se crean las agencias reguladoras estatales, que eran «un requerimiento del Banco Mundial para ordenar el sector en función de los intereses del capital», como asegura el doctor Ildo Sauer (2012).

Con la entrada del gobierno del PT presidido por Lula en el año 2002, se produjo una redefinición general del modelo económico, lo que supuso la implantación de un proyecto de corte neo-desarrollista que fue sustituyendo parcialmente al neoliberalismo ortodoxo de la época de Fernando Henrique Cardoso. A efectos prácticos significó la paralización del modelo de privatizaciones tradicional (venta del 100% de la empresa pública) y su sustitución por un modelo de carácter mixto, donde el gobierno promueve emprendimientos compartidos entre el capital público y el privado, repartiéndose las acciones. Esta lógica se traslada al sector eléctrico, donde la mayoría de los nuevos proyectos de generación que se ponen en marcha están impulsados por corporaciones público-privadas, que además, bajo la lógica del neo-desarrollismo, reciben financiación de fuentes públicas, en este caso del banco público más importante del Brasil, el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) (Sauer, 2012).

En la actualidad, la industria eléctrica brasileña está dividida en dos sistemas: el denominado «sistema aislado nacional», que se ubica en la zona norte-amazónica y apenas supone un 2% de la demanda nacional total y el llamado «sistema interligado nacional», que abarca el 98% de la demanda restante. Este segundo sistema está sustentado fundamentalmente en plantas de generación hidroeléctricas, que suponen el 90% de la generación total del país, mientras que el resto son centrales térmicas (Gonçalves, 2007: 62-63). Brasil es el tercer país del mundo en capacidad instalada en generación eléctrica y el segundo en participación porcentual de la hidroelectricidad en la matriz eléctrica, después de Noruega (Sauer *et al.*, 2011: 28).

Respecto a Iberdrola, esta llega a Brasil en el año 1997 y junto al Fondo de Pensiones Previ del Banco de Brasil adquiere el Consorcio Guaraniana, para empezar a operar en el nordeste del país (MAB, 2010: 21). Ese año compra las empresas eléctricas del Estado

de Bahía (Coelba) y de Río Grande Do Norte (Cosern). En 1998 entra en el negocio de generación con la implantación de la hidroeléctrica de Itapebí en Bahía. En el año 2000 adquiere otra distribuidora, ahora la del Estado de Pernambuco (Celpe) y amplía su participación en generación con el inicio de la construcción de las plantas de Termoper-nambuco y Termoçu. Entre el 2001 y el 2006 incrementa su capacidad de distribución en las tres eléctricas que ya controlaba (Coelba, Cosern y Celpe) y aumenta su presencia en generación hidroeléctrica con las centrales de Dardanelos, Columba, Baguarí, Nova Aurora y Goandira (Sastre, 2011: 16-17).

A día de hoy, en el subsector de la distribución, Iberdrola tiene su principal negocio en el nordeste del país, fundamentalmente a través de las tres empresas citadas (Coelba, Celpe y Cosern) que forman parte del grupo Neenergia. Este consorcio está participado por Iberdrola, que tiene el 39% de las acciones, por Fondos de Pensiones Previ,² con el 49% y el Banco de Brasil, que controla el 12% de las acciones restantes.³ Por otro lado, en enero de 2011 Iberdrola compró Elektro, una de las distribuidoras importantes del Estado de São Paulo, por 2400 millones de dólares (Iberdrola, 2011a: 38-39). Para fines de septiembre de 2011, Iberdrola tenía un volumen de clientes superior a los 11 millones y medio de personas (Iberdrola, 2012c: 10). Este alto número de clientes posiciona a Iberdrola como una de las empresas más importantes de Brasil en el subsector de la distribución, siendo Neenergia la primera en el nordeste del país, con un 43% del mercado (Cinco Días, 2011).

En el subsector de la generación, el *Informe anual de Iberdrola* correspondiente al ejercicio 2010 muestra que tiene una capacidad instalada en Brasil de 2077 megavatios (MW), de los cuales 1075 MW son hidroeléctricos, 953 MW térmicos y 49 MW eólicos (Iberdrola, 2011a: 38). En generación térmica, destacan la central de ciclo combinado Termopernambuco (520 MW), y la de cogeneración Termoacu (368 MW).⁴ En cuanto a generación hidroeléctrica, el citado informe de 2011 indicaba que había ocho proyectos en operación, destacándose la central de Itapebí (450 MW), la de Dardanelos (261 MW), la de Baguarí (140 MW) y la de Corumba III (94 MW), mientras que las cuatro restantes son menores: Goiás Sul (48 MW), Río PCH (39 MW), Sitio Grande (25 MW) y Afluente (18 MW). Los escasos 49 MW eólicos corresponden al parque de Botafogo (Iberdrola, 2012b: 13)

Respecto a los nuevos proyectos en generación, estos suman 13.691 MW, sobresa-liendo con mucha diferencia uno de ellos, la central hidroeléctrica Belo Monte, sobre la que hemos hecho el estudio de caso, que tendrá aproximadamente unos 11.233 MW. Neenergia participa en este proyecto con el 10% de las acciones. Los otros emprendi-mientos hidroeléctricos serán la central de Teles Pires, con 1820 MW y con una partici-

2. Previ es un fondo de pensiones privadas del Banco de Brasil.

3. A principios de 2012 la prensa económica filtró la noticia de que Iberdrola pretendía aumentar su participación en Neenergia al 75% (Bloomberg, 2012), a pesar de que Fondos Previ había negado un mes antes que le hubiera vendido una parte de sus acciones (Expansión, 2011).

4. Existe un pequeño desfase entre los 935 megavatios térmicos que Iberdrola dice que tiene en Brasil y la suma de Termopernambuco (520 MW) y Termoacu (367 MW), que da un total de 887 MW.

pación accionarial de Neoenergia del 50,1% y, la planta de Baixo Iguaçu de 350 MW. A la energía eólica se destinarán los escasos 288 megavatios restantes (Iberdrola, 2012b: 13), que será distribuida en 10 pequeños parques que se ubicarán en Bahía y en Río Grande do Norte (Roca, 2012).

3. Las grandes corporaciones y sus impactos

La literatura crítica relativa a las grandes corporaciones y a los impactos múltiples que generan es extensa y se remonta muy atrás en el tiempo, desde el surgimiento y expansión del fenómeno de las empresas multinacionales (Teitelbaum, 2010: 36). A lo largo de la historia del capitalismo su centralidad ha sido indudable y a principios del nuevo siglo, en el marco del actual proceso de globalización neoliberal, diversos autores coinciden en identificarlas como una de las instituciones dominantes de nuestro tiempo (Petras y Veltmeyer, 2007: 63; Achbar y Abbot, 2009; Carrión y Verger, 2007: 10; Sánchez Pérez, 2008; Zabalo, 2007: 7; Hernández Zubizarreta, 2009b: 111-113; Teitelbaum, 2010)

Los impactos que generan son múltiples y por tanto no se circunscriben solo al ámbito económico, sino que se manifiestan en otros campos como el político, el social, el laboral, el ambiental, el cultural, etc. A continuación, vamos a señalar de manera muy sintética, algunos de los impactos más habituales que suelen provocar las corporaciones.

En el *ámbito económico* los impactos que generan las corporaciones son diversos. Por un lado, tenemos la mercantilización de servicios públicos (gas, electricidad y agua) que se ha producido en las tres últimas décadas, provocando la conversión de «bienes públicos» en «mercancías», y por tanto, tornando prioritaria la «lógica de lucro» frente a la «lógica de asegurar un servicio público básico a toda la población» (Uharte, 2005: 109-110). Por otro lado, la reducción de soberanía nacional, cuando se permite la inserción extranjera en sectores estratégicos (Petras y Veltmeyer, 2007: 223). A su vez, debemos señalar los elevados márgenes de rentabilidad que obtienen muchas empresas, como consecuencia de la transferencia de riqueza de manos públicas a privadas a través de diversos mecanismos: privatización a bajo costo, legislación que permite altos precios del servicio, subvenciones públicas y ventajas fiscales (reducción de impuestos), imposición de salarios bajos, etc.

En el *terreno político*, algunas grandes corporaciones distorsionan el funcionamiento del sistema democrático. Se sirven de diferentes instrumentos, como por ejemplo, la práctica del *lobby*.⁵ Hernández Zubizarreta (2009b: 132) advierte de los «múltiples recursos económicos» que las corporaciones invierten para influir en las decisiones políticas tanto de organismos nacionales como internacionales. Paralelamente, destaca la *corrupción* a través del soborno a funcionarios, cargos gubernamentales, etc., a los que se les promete una remuneración a cambio de legislar a su favor, adjudicar contratos de obra o servicio,

5. En el informe del PNUD de 2004 sobre «La democracia en América Latina» algunos presidentes de la región destacaron la influencia creciente de los *lobbys* de las grandes corporaciones y reconocieron que esto suponía un «obstáculo a la democracia» (Hernández, 2009b: 118).

conseguir un trato de privilegio, ... (Carrión y Verger, 2007: 12).⁶ Otro impacto relevante es la incidencia de las corporaciones en los medios de comunicación. Carrión y Verger (2007: 13) apuntan que hoy día, los *mass media* «no acostumbran a informar» sobre los «abusos que se derivan de la actividad» de las corporaciones, porque tienen «una estrecha relación con ellas» (vía publicidad o control de acciones en los medios). El nuevo marco jurídico favorable a las multinacionales que se ha ido configurando a nivel internacional es otro aspecto clave. Hernández Zubizarreta (2009a: 20-23) afirma que «es flagrante la asimetría entre la evolución del derecho comercial global y la del derecho internacional de los derechos humanos». La criminalización de grupos opositores es otro impacto reseñable. Ramiro (2011: 11) apunta que «en muchos casos, los integrantes de organizaciones sociales que han criticado el poder de las corporaciones han sido criminalizados y reprimidos por la fuerza pública o por milicias paramilitares».

Los diversos impactos *ambientales* constituyen otra dimensión de gran relevancia. Destacan las múltiples formas de contaminación (emisión de gases efecto invernadero, vertidos tóxicos, ...), y la destrucción del hábitat y la biodiversidad, que son una consecuencia directa del modelo desarrollista en el que estamos insertos. La presencia de las corporaciones en áreas altamente contaminantes como las industrias extractivas (hidrocarburos, minería, etc.) las coloca en una posición de primer orden entre los agentes responsables (Petras y Veltmeyer, 2007: 228).

En el plano *laboral* los impactos son también diversos, tanto en relación con el derecho al trabajo, como con el derecho a trabajar en condiciones dignas (Teitelbaum, 2010: 87). Reducción salarial, fin de la estabilidad laboral, supresión de los convenios colectivos, tercerización de algunas áreas, aumento de la inseguridad laboral, discriminación por género, etnia, etc., son algunas de las principales denuncias que se realizan contra las corporaciones. A esto hay que añadir el ataque a los derechos sindicales como la libertad de afiliación, el respeto a la acción sindical sin represalias, etc. (Teitelbaum, 2010: 105).

Las *comunidades* de los lugares donde las corporaciones tienen presencia se convierten en algunos casos en sectores afectados por sus prácticas. Los impactos son diversos según el tipo de empresa: desplazamientos de población, pérdida de tierras, impactos en la economía local (agricultura, pesca, ...), deterioro del tejido social, de los vínculos afectivos. También destacan los impactos que padecen las y los usuarios de servicios públicos (distribución de gas, agua y electricidad): aumentos desproporcionados de tarifas, exclusión de grupos de población de barrios populares o de zonas rurales no consideradas «rentables» (Ramiro, 2011: 10-11).

Los pueblos *indígenas* aparecen también como un grupo especialmente vulnerable a las prácticas de las grandes corporaciones. Las agresiones a su territorio —tanto a su propiedad como a los recursos de que disponen—, a su identidad cultural y a sus modos de organización política son algunas de las violaciones más denunciadas. Berraondo (2008: 93) asegura que existe un «cuadro recurrente» de violaciones a los pueblos indígenas como

6. Al ser una práctica «oculta» resulta difícil de medir, aunque la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) calcula que el soborno internacional se acerca a los 150.000 millones de dólares al año en todo el mundo, y Transparencia Internacional lo eleva a los 400.000 millones (Hernández, 2009b: 128-129).

la expropiación de tierras, la reubicación, la inundación de sus territorios, la discriminación, la destrucción medioambiental de su hábitat, la represión, etc. Podemos destacar los conflictos como el de los pueblos originarios de la Amazonía peruana contra las mineras, el de los mapuches frente a corporaciones eléctricas en Chile, etc. (Ramiro y González, 2010: 189-200).

4. Los impactos de Iberdrola en Brasil⁷

En esta segunda década del siglo XXI, Brasil es uno de los países estratégicos para el negocio de la multinacional eléctrica española Iberdrola. Su implantación y sus proyectos de futuro así lo evidencian. La investigación realizada y el trabajo de campo desarrollado en diversas partes del país, fundamentalmente en el norte de Brasil, donde está participando en el megaproyecto hidroeléctrico de Belo Monte, nos han posibilitado recopilar información suficiente para identificar impactos de diversa índole que Iberdrola está provocando en el gigante sudamericano.

Teniendo como guía de análisis el apartado anterior, donde hemos señalado los principales impactos que las grandes corporaciones suelen provocar, vamos a presentar a continuación los efectos múltiples que Iberdrola está generando con su práctica empresarial en Brasil, entre los que destacan los siguientes: pérdida de soberanía, mercantilización de un servicio público, rentabilidad empresarial en detrimento del erario público y de la ciudadanía, deterioro de la democracia, práctica del lobby, estímulo a la corrupción, criminalización de activistas sociales, degradación ambiental, y vulneración de derechos laborales, comunitarios y de pueblos indígenas. Todos estos impactos configuran un cuadro donde el beneficio y los intereses de una gran multinacional están siendo priorizados frente al desarrollo del país. Pasamos a continuación a presentarlos.

Soberanía. La entrada masiva de multinacionales en la segunda mitad de los años noventa en Brasil tuvo un impacto de gran envergadura en materia de soberanía nacional. El proceso de privatización de la electricidad que comienza en 1995 estuvo dominado por un pequeño grupo de multinacionales de Europa y de Estados Unidos, que se aliaron con «los grandes bancos», las «principales empresas mineras y metalúrgicas» y grandes contratistas. Un trabajo reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) corrobora que la mayoría de los privados son grupos transnacionales y concretamente los siguientes: Iberdrola (Estado español), Enel (Italia), GDF Suez (Francia), EDF (Francia), AES (EE.UU.), Duke Energy (EE.UU.) e ISA (Colombia). Según datos de la CEPAL, «Eletrobras ha reducido su porcentaje de la capacidad generadora del 71% en 2003 al 36% en 2011» (CEPAL, 2012: 232-242).

7. Este apartado es una adaptación del subcapítulo titulado 'Los impactos de Iberdrola en Brasil' del citado libro 'Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y en Brasil', escrito por Luis Miguel Uharte Pozas.

Desde 2004 en adelante, con la entrada del gobierno de Lula y posteriormente de Rousseff, el modelo neo-desarrollista que sustituye progresivamente al neoliberal, redefine la inserción del capital privado extranjero. Se pasa a un «modelo híbrido», donde el capital nacional público y privado se asocia con el capital internacional (Sauer, 2012). La mayor parte de los operadores privados se asociaron a Eletrobras, para «contar con el respaldo del gobierno» a sus proyectos, como reconoce la CEPAL (2012: 232). Para Ildo Sauer, ex asesor de Lula en materia eléctrica, este modelo aunque da más capacidad de maniobra al gobierno, ya que controla un importante porcentaje de las acciones, «mantiene el interés de las grandes empresas» (Sauer, 2012).

Mercantilización. Cuando un servicio público básico como es la provisión de luz eléctrica empieza a privatizarse, la consecuencia inmediata es su mercantilización progresiva. En el caso de la distribución, la mercantilización ha sido profunda ya que hoy día casi dos tercios del subsector están en manos privadas. Esto no es por casualidad, sino porque «la distribución de la energía eléctrica es la rama más rentable de la actividad», como señala el MAB (2010: 25). Los altos precios que se pagan en Brasil son el mejor indicador de que la distribución de electricidad es una mercancía de alto rendimiento. Según el MAB (2010: 8), «las tarifas eléctricas aumentaron casi un 400% desde el inicio de la privatización», lo que ha traído como consecuencia que Brasil tenga la quinta tarifa más cara del mundo. No es extraño entonces que Iberdrola se haya centrado fundamentalmente en el ámbito de la distribución, donde está presente en 4 estados del país (São Paulo, Bahía, Pernambuco y Rio Grande do Norte).

La mercantilización también se ha producido en el ámbito de la generación, aunque de manera más lenta que en la distribución. En la primera etapa de privatización (1995-2001) la entrada de empresas lucrativas se centró fundamentalmente en la distribución eléctrica. Sin embargo, en la última década, según los datos de la propia Cepal antes citados, el sector privado ha ido aumentando su presencia en detrimento de la estatal Eletrobras, pasando del 29% en 2003 al 64% en 2011 (CEPAL, 2012: 232-42).

El profesor de la Universidad de Río de Janeiro y experto en el sector eléctrico, Carlos Vainer (2012), indica que el actual modelo desarrollista está diseñado en función de los intereses del complejo minero-metalúrgico privado, que necesita mucha electricidad para producir. La creación de riqueza privada influye en gran medida en la producción de electricidad, evidenciando su carácter mercantilista. Además, en los últimos tiempos se está fortaleciendo el modelo de «autoproductores», donde el citado complejo minero-metalúrgico tiene sus propias plantas hidroeléctricas. La lógica mercantilista se agrava aún más si tenemos en cuenta que estos emprendimientos están financiados en gran medida con dinero público, del BNDES. Es decir, un banco público financia proyectos de interés privado.

La lógica de la mercantilización trae como consecuencia que se descuiden las zonas menos lucrativas. Sollero y Nadaletti (2012) señalan que «con la privatización la calidad en el medio rural empeoró porque no se hacen inversiones nuevas, ya que el lucro en estos territorios es menor». Otra de las consecuencias graves de la mercantilización es que se legalizan precios que terminan siendo calificados por la propia Agencia Nacional de Energía Eléctrica como inmorales: en el segundo semestre de 2009, una Comisión de la Cámara

de Diputados inició un proceso para «investigar las razones por las que el recibo de la luz en Brasil está entre los más caros del mundo» [...] la respuesta de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) fue que «el cobro es inmoral, pero es legal» (MAB, 2010: 28). Las cuatro empresas distribuidoras que Iberdrola controla en el país (Elektro, Coelba, Celpe y Cosern), participan de este negocio «legal» pero «inmoral», según la ANEEL.

Rentabilidad. Los notables beneficios que obtiene Iberdrola en Brasil son consecuencia de la transferencia de riqueza pública —desde el Estado y desde la ciudadanía— que se produce de manera planificada, desde que se dio impulso a la privatización. El profesor Carlos Vainer lo define como «una transferencia brutal de recursos públicos» a la iniciativa privada (Vainer, 2012).

Los beneficios que Iberdrola presenta en sus informes oficiales son uno de los mejores indicadores para corroborar esto, ya que en plena crisis internacional, la rentabilidad sigue siendo alta. El Ebitda («beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones») global de Iberdrola del año 2010 aumentó en comparación con el año anterior un 10,5%, logrando en Brasil un crecimiento ligeramente superior a la media, un 10,9% (Iberdrola, 2011c: 160).

Brasil es un país muy rentable porque es uno de los territorios donde el negocio de Iberdrola es regulado, es decir, no tiene que competir de facto con otras empresas porque el Estado le otorga concesiones en régimen de monopolio. Los beneficios comparados de 2011 certifican cómo el negocio regulado en realidad es un gran negocio ya que opera en un modelo de protección estatal: a pesar de la crisis y de la caída del negocio liberalizado, en los nueve primeros meses de 2011 el negocio regulado aumentó un 6% sus beneficios (Iberdrola, 2012b: 9). La actividad de generación es también un buen negocio para Iberdrola en Brasil porque el Estado otorga una concesión entre 15 y 30 años, asegurando los ingresos durante este periodo, según confirma la propia multinacional (Iberdrola, 2011c: 35).

La rentabilidad es más segura si tenemos en cuenta, según denuncia el profesor de la Universidad de Campinas, Oswaldo Seva, que Iberdrola y el resto de privadas «realmente no invierten nada, porque compran empresas distribuidoras que ya existían con dinero público, que les presta el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES)». Se produce la paradoja de que se utilizan recursos públicos brasileños para viabilizar la entrega al sector privado de empresas estatales (Seva, 2012a). Otro mecanismo que reduce riesgos para el sector privado y que por tanto asegura su rentabilidad es el modelo de proyectos compartidos con el Estado, que los gobiernos de Lula y Rousseff han impulsado. Iberdrola, por ejemplo, está participando en la construcción y futura gestión de proyectos hidroeléctricos con instituciones públicas, lo cual le ofrece un blindaje mayor de su negocio. La presa de Baguarí, donde comparte acciones con Cemig y Furnas (Eletrobras), es un buen ejemplo de ello (MAB, 2010: 33).⁸ Otro ejemplo es la futura presa de Teles Pires, donde participa en un consorcio con la estatal Eletrobras (Roca, 2011).

8. El modelo de proyectos compartidos con instituciones públicas también lo desarrolla Iberdrola en el sector eólico, donde tiene proyectados 10 parques en asociación con Neoenergía (Roca, 2012), corporación mixta de capital público-privado.

Una de las vías que mayor rentabilidad le está generando en Brasil a Iberdrola, en detrimento de los y las usuarias, es la combinación de unos precios elevados con un modelo de producción barato: el hidroeléctrico. Todos los expertos consultados han indicado que la generación de electricidad a través de centrales hidroeléctricas es mucho más barata que a través de centrales térmicas o de otro tipo (Vainer, 2012; Bermann, 2012b; Sauer, 2012; Seva, 2012b). En el caso de Brasil, ya hemos señalado que aproximadamente un 90% de la producción es hidroeléctrico. Iberdrola, por su parte, concentra su actividad de generación en presas y sus proyectos futuros acentuarán más esta tendencia, ya que de los 13.691 MW proyectados, más de 13.400 serán en hidroelectricidad (Iberdrola, 2012b: 13). La gran paradoja es que en Brasil, según Dorival Gonçalves (2007: 383), «se vende la electricidad proveniente de usinas hidroeléctricas a precios de energía producida por térmicas». El negocio, en consecuencia, es astronómico. Neenergia, por ejemplo, del cual Iberdrola posee el 39% de las acciones, dispone de centrales hidroeléctricas que le venden barato a sus propias filiales (Coelba, Celpe y Cosern), para luego venderle muy caro a las y los ciudadanos (Gonçalves, 2007: 366).

Eficiencia. En Brasil, al igual que en otras partes del mundo, el neoliberalismo diseñó un discurso ideológico que pretendía justificar la privatización como vía para superar la ineficiencia del Estado en la provisión de servicios públicos como la distribución de electricidad. Gonçalves, investigador del sector, asegura que este discurso fue defendido por el Banco Mundial y otros organismos multilaterales con el objeto de facilitar la penetración de las multinacionales. Sin embargo, en el caso de Brasil, la privatización que se pone en marcha en el año 1995 terminó provocando una fuerte crisis energética en el periodo 2001-2002, ya que «producto de la escasa inversión privada», se generó un deterioro sustancial de la calidad del servicio y graves problemas de abastecimiento, «instalándose un escenario de permanente escasez». Paradójicamente, la «más eficiente gestión privada» acabó demostrando un mayor grado de ineficiencia en la provisión del servicio (Gonçalves, 2007: 27-28).

Sin embargo, la ineficiencia del sector fue aprovechada por los sectores privados para reclamar un aumento importante de las tarifas, que fue definitivamente aprobado por el gobierno (Gonçalves, 2007: 27). Esto ha convertido a Brasil en uno de los países con los precios más altos del mundo, muy por encima de otros con mayor nivel de renta per cápita como Estados Unidos. En este último país, por ejemplo, en los Estados en los que predomina la hidroelectricidad el megavatio está alrededor de 50 dólares, mientras en Brasil llegó a cerca de 100 dólares (Gonçalves, 2002: 204). Esto evidencia un manejo absolutamente ineficiente, en términos sociales, de un recurso básico como es la electricidad. Genera beneficios para una empresa que enriquece a una minoría pero demuestra una radical ineficiencia en la gestión de un bien básico.

Ante este manejo ineficiente en términos sociales, Iberdrola indica que ha recibido premios en el país gracias a su supuesto buen desempeño. Asegura que sus empresas Celpe, Coelba y Cosern han recibido premios por ofrecer un servicio de calidad, entre los años 2008 y 2010 (Iberdrola, 2012a). Sin embargo, estas tres empresas ubicadas en el nordeste del país siguen siendo denunciadas por su mal servicio, como recuerdan los

grandes expertos en el sector eléctrico brasileño, como el doctor Bermann (2012b) y el profesor Vainer (2012). Celio Bermann, profesor de la Universidad de São Paulo y uno de los mayores expertos del sector, puntualiza que antes de la privatización, Coelba, Celpe y Cosern eran empresas ineficientes, pero después de que pasaron a manos de Iberdrola, los niveles de ineficiencia son mayores, ya que la tercerización ha provocado un deterioro notable de la calidad del servicio (Bermann, 2012b). De hecho, la propia Iberdrola no puede ocultar en su informe de sostenibilidad que ha recibido diversas multas en el país por mala calidad del servicio (Iberdrola, 2011d: 161).

Democracia. Los proyectos de Iberdrola en Brasil están provocando impactos de orden político, destacándose entre otros los que afectan al propio funcionamiento de la democracia. El caso de Belo Monte es muy significativo, ya que los movimientos sociales que se oponen a la construcción de la megapresa (MAB y Xingu Vivo) coinciden en señalar la falta de un proceso de consulta real con la población de los municipios afectados (Altamira, Brasil Novo y Vitoria do Xingu). Moises Da Costa, del MAB, apunta que Norte Energia y el gobierno han realizado cuatro audiencias públicas en la región, pero en estas «no se consulta realmente, sólo se informa del proyecto». No han dado opción de realizar un referéndum para preguntar a la población autóctona (Da Costa, 2012). Desde el ámbito académico el profesor Bermann (2012a: 2) también señala los límites de la democracia, porque en éste y en otros proyectos energéticos similares no se ha producido «el debate deseado» y «los procesos de toma de decisión» han sido muy autoritarios. «En este momento en Brasil estamos viviendo una autocracia energética» (Bermann, 2012b).

Pero sin duda alguna, el indicador más grave del deterioro de la lógica democrática es la subordinación de las autoridades políticas a los poderes económicos. En el caso de Belo Monte el uso de fondos empresariales para financiar a instituciones públicas es quizás el caso más relevante en este sentido, destacando la financiación directa a la policía, tanto municipal como estadual (Pará). La propia policía de Altamira reconoce que Norte Energia ha financiado con siete millones de reales (casi tres millones de euros) a las fuerzas de seguridad: «la empresa entregó al gobierno del Estado de Pará, 44 vehículos, 36 motocicletas y un helicóptero para el 16º batallón de la policía de Altamira [...] este monto es apenas un primer pago de un total estimado en 100 millones de reales (40 millones de euros) previstos hasta 2013» (Policía de Altamira, 2012). La agresión a la lógica democrática se agrava aún más si tenemos en cuenta que Norte Energia había conseguido que los vehículos que compró a la policía llevaran el logo de la empresa, evidenciando visualmente a quien se subordina realmente la policía.

Lobby. El profesor Celio Bermann (2012b) asegura que las empresas privadas extranjeras y nacionales hacen constantemente «presión en diversos niveles de gobierno», desde el Ejecutivo central y el ministerio de minas y energía hasta las autoridades estaduais. Precisa que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), está también sometida a la presión de las corporaciones ya que juega un papel fundamental como reguladora del sistema eléctrico. Bermann asevera que Iberdrola hizo uso de su poder empresarial para influir en el proceso de privatización de Coelba, Celpe y Cosern, las cuales controla a través del consorcio Neenergia.

La práctica del *lobby* no ha desaparecido con los gobiernos de Lula o Rousseff, según señalan los miembros del MAB, Sollero y Nadaletti (2012). Aseguran que a día de hoy, «el Ministerio de energía y minas está controlado por empresas privadas del rubro como Iberdrola». El control es tal que el ministerio «no ha querido hacer un catastro de afectados por las represas, debido a la presión de estas empresas». Recuerdan que en el año 2005, el *lobby* eléctrico presionó «para quitar al ministro de medio ambiente del gobierno de Lula» y finalmente consiguieron que lo destituyeran. Ponen también el ejemplo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), que siempre estuvo muy presionado por las corporaciones privadas. Hace unos años el IBAMA se resistió a conceder las licencias ambientales a varios proyectos multinacionales hidroeléctricos, debido a los impactos previstos en la zona amazónica. El *lobby* transnacional consiguió que el gobierno desmembrara el IBAMA y creara otro instituto que finalmente concedió las licencias.

El lobby también opera a escala municipal, en las distintas ciudades donde Belo Monte va a tener influencia. Da Costa (2012) indica que «la mayoría de los políticos están a favor de la obra porque consiguen recursos para el municipio, para la gobernación, etc.». Asumen el discurso de las empresas porque estas realizan una labor de cooptación fuerte. El caso del Partido de los Trabajadores (PT) es muy sintomático, ya que antes se oponía a Belo Monte pero ahora que están en el gobierno central, prácticamente todos sus cargos han pasado a apoyar la obra como bien recuerda Fabio Vargas (2012), activista contrario al proyecto.⁹

Corrupción. La práctica del *lobby* está habitualmente asociada al fenómeno de la corrupción que muchas veces termina estimulando. Un buen ejemplo lo encontramos en nuestro estudio de caso, en Belo Monte. Norte Energía, el consorcio empresarial que se ocupa de la obra y al que pertenece Iberdrola, ha estado pagando la campaña política a los partidos para asegurarse así su fidelidad. Bermann (2012b) afirma que «las empresas del consorcio de Belo Monte han estado dando fondos de campaña para el PT pero también para los otros partidos, y ahora esperan recibir los resultados de ese apoyo». Antonia Melo (2012), portavoz de la coordinadora opositora al proyecto «Xingu Vivo» asevera que «las autoridades políticas están todas apoyando [...] callan y consienten porque para ellos también hay beneficios [...] la empresa paga sus campañas». Claret (2012), miembro del MAB en Brasil Novo, uno de los municipios afectados, apunta que «los políticos están muy entusiasmados con el proyecto porque reciben mucho dinero [...] el interés de ellos es la reelección y continuar en el poder».

Edizangela (2012), líder comunitaria de uno de los barrios de Altamira que será inundado por la presa de Belo Monte, indica que Norte Energía está intentado corromper a todos los grupos, ya sean políticos, sociales o económicos. Señala que «el prefecto entregó el municipio a Norte Energía a cambio de dinero, carros, etc. [...] Los concejales hicieron una reunión con Norte Energía y recaudaron de la empresa para su campaña electoral [...] Norte Energía también ha intentado comprar a las asociaciones de vecinos, pagán-

9. Los diputados del PT de Pará siempre fueron contrarios al proyecto hidroeléctrico en el río Xingu [...] sólo hasta que en enero de 2003 los petistas llegaron al poder en Brasilia, y especialmente después de enero de 2007, cuando llegaron al poder en Belém (Pará) (Sevá, 2012a: 29).

dole a cada asociación 40.000 reales [...] con las congregaciones religiosas también han hecho lo mismo, dándoles a algunas 30.000 reales [...] así intentan comprar a todas las asociaciones y a todo el mundo».

Criminalización y represión. El sector eléctrico en Brasil es un foco de importante conflictividad por dos variables fundamentales: por los altos costos de la energía tras la privatización de los años noventa (Gonçalves, 2007; Sauer, 2012; Vainer, 2012), que trajo movilizaciones sociales para exigir tarifas más justas; por la construcción de grandes presas que han provocado desplazamientos de población y focos de resistencia en diferentes zonas del país. Hay que tener en cuenta que el modelo de grandes presas ha expulsado en las cuatro últimas décadas a más de un millón de personas de sus hogares, quedando un alto porcentaje de estas —alrededor de un 70%— sin ningún tipo de indemnización (MAB, 2010: 17).

La presa de Belo Monte está generando importantes conflictos con diversos sectores sociales, algunos de los cuales han sido criminalizados. Antonia Melo, portavoz de «Xingu Vivo», movimiento social opositor al proyecto, señala que Iberdrola y el resto de corporaciones ha intentado criminalizarles y que ha contado con el apoyo policial y judicial (Melo, 2012). Desde el movimiento de apoyo a los y las afectadas por las presas (MAB), Antonio Claret (2012) asegura que la represión psicológica es muy intensa ya que la «policía te saca fotos, te intimida». Un sector que también está siendo criminalizado por la empresa y reprimido por la policía es el de los trabajadores. Francinildo Teixeira, líder huelguista despedido por reivindicar condiciones laborales dignas, asegura que la policía les amedrenta de diferentes maneras: «escoltando nuestros autobuses cuando vamos a trabajar»; «sentándose en nuestros comedores con arma pesada». A esto hay que agregar la represión directa que la empresa ejerce contra los huelguistas a través de sus guardias privados. Teixeira indica que él y otros huelguistas fueron agredidos en marzo de 2012 (Teixeira, 2012).

Ambiental. Iberdrola realiza un fuerte esfuerzo de marketing en Brasil para intentar proyectarse como empresa ejemplar en materia medioambiental. Para ello, además de la publicidad tradicional en medios de comunicación y en eventos de todo tipo, dedica una parte sustancial de sus informes a presentar los supuestos logros en lo referente al medio ambiente. En su *Informe de biodiversidad 2010*, por ejemplo, destaca sus esfuerzos para la «conservación de bosques», la recuperación de áreas degradadas alrededor de centrales hidroeléctricas y la «reforestación de especies nativas», por parte del consorcio Neenergía (Iberdrola, 2011b: 39-40).

Sin embargo, la realidad se aleja diametralmente de este discurso si revisamos con rigurosidad diversos datos relativos al campo ambiental. En primera instancia, la capacidad instalada de Iberdrola en Brasil para fines de 2010 se componía de 953 MW térmicos, 1075 MW hidroeléctricos y sólo 49 MW eólicos. Esto significa que más del 45% de la generación es sucia, ya que está asociada a un combustible como el gas, concretamente en la central de ciclo combinado Termopernambuco y en la de cogeneración Termoacu. Por el contrario, la energía eólica para esa fecha apenas suponía el 2% de sus emprendimientos en generación eléctrica

Tabla 1. Capacidad instalada de Iberdrola en Brasil en 2010

	MW	%
Térmicas	953	45,88%
Hidroeléctricas	1075	51,75%
Eólicas	49	2.35%
Total	2077	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del *Informe anual 2010* (Iberdrola, 2011a: 38)

Por otro lado, las grandes presas generan también importantes efectos ambientales, por lo que el 51% de generación hidroeléctrica de Iberdrola no podemos valorarla como inocua. El movimiento ecologista propuso hace varios años que las grandes hidroeléctricas no fueran incluidas dentro del grupo de energías a promocionar, que serían: la biomasa moderna, la geotérmica, la eólica, la solar, la energía marina y las pequeñas hidroeléctricas (de menos de 10 megavatios). Las grandes presas, además de los millones de personas que han desplazado en las últimas décadas, provocan diversos tipos de impactos ambientales: «erosión de cuencas y alteración de cauces» (Sauer *et al.*, 2011: 30); «emiten cantidades significativas de gases invernadero (metano y CO₂) debido a la materia orgánica en descomposición, especialmente los situados en zonas tropicales»; además «son el primer factor responsable de la pérdida de biodiversidad ribereña en todo el mundo» (Ecologistas en Acción, 2004). Si evaluamos las ocho presas que Iberdrola identifica como propias en el año 2011, observamos que todas ellas son grandes hidroeléctricas, como podemos comprobar en la siguiente tabla, algunas de ellas además de importantes dimensiones, como la de Itapebí (450 MW) y Dardanelos (261 MW) (Iberdrola, 2012b: 13), y por tanto muy alejadas del concepto de mini-hidráulica de 10 megavatios o menos.

Además, si revisamos los proyectos a corto plazo en los que Iberdrola está participando en Brasil, podemos comprobar que la tendencia a embarcarse en emprendimientos de fuerte impacto ambiental se acentúa. Sus nuevos proyectos en generación suman 13.691 MW, sobresaliendo con mucha diferencia uno de ellos, la gigantesca central hidroeléctrica Belo Monte, que tendrá una capacidad instalada de 11.233 MW. A esta hay que sumar dos presas más, la de «Teles Pires» de 1820 MW y la de Baixo Iguaçu de 350 MW. A energía eólica se destinarán los escasos 288 megavatios restantes (Iberdrola, 2012b: 13), que será distribuida en 10 pequeños parques que se ubicarán en Bahía y en Río Grande do Norte (Roca, 2012). Esto significa que las grandes hidroeléctricas concentrarán el 98% de la futura capacidad instalada, frente a un raquítico 2% de la energía eólica. La situación es aún más preocupante si reparamos en el enorme tamaño de las dos principales presas y en las consecuencias ambientales que provocarán emprendimientos de tal calibre. Solo la de Teles Pires, será cuatro veces más grande que la de Itapebí, la presa de Iberdrola de mayor capacidad actualmente en el país. La de Belo Monte, por su parte, será 25 veces

mayor que la de Itapebi. Como es obvio, los efectos ambientales serán también más o menos proporcionales (emisión de gas metano, pérdida de biodiversidad, ...).

Tabla 2. Capacidad instalada hidroeléctrica de Iberdrola en Brasil (2011)

	MW	%
Itapebi	450	41,86
Dardanelos	261	24,27
Baguarí	140	13,02
Corumba III	94	8,74
Goiás Sul	48	4,46
Rio PCH	39	3,62
Sitio Grande	25	2,32
Afluente	18	1,67
Total	1075	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe de resultados de los nueve primeros meses de 2011 (Iberdrola, 2012b: 13)

Tabla 3. Capacidad instalada de los futuros proyectos de Iberdrola en Brasil

	MW	%
Belo Monte	11.233	82,04%
Teles Pires	1820	13,29%
Baixo Iguaçu	350	2,55%
Eólicos	288	2,10%
Total	13.691	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe de resultados de los nueve primeros meses de 2011 (Iberdrola, 2012b: 13)

El último aspecto crítico en materia ambiental que queremos señalar sería la inserción en energía nuclear de Iberdrola en Brasil. En la segunda mitad del año 2011 Iberdrola Ingeniería y Construcción se adjudicó un contrato para modernizar la «Unidad 2 de la central nuclear Almirante Álvaro Alberto, también conocida como central nuclear de Angra, ubicada en Río de Janeiro» (ICEX, 2011). Teniendo en cuenta que el accidente nuclear de Fukushima fue en marzo de 2011, resulta significativo que pocos meses después Iberdrola se embarque en un nuevo proyecto nuclear, con la potencial capacidad de devastación que siempre conlleva.

Laboral. El plan de privatización de parte del sistema eléctrico brasileño provocó efectos perniciosos a nivel laboral, tanto por la destrucción de puestos de trabajo como por la precarización de las condiciones laborales de las y los empleados del sector. Gonçalves recuerda que antes de la privatización se produjo la primera oleada de despidos masivos, con el objetivo expreso de entregar las empresas públicas al sector privado en las mejores condiciones posibles. Se buscaba reducir el costo que estas tendrían que asumir en el futuro por indemnizaciones por despido, etc. El Estado asumía las cargas y «actuaba en función de los intereses del capital» (Gonçalves, 2002: 188). La consecuencia fue que las arcas públicas fueron utilizadas para facilitar la futura rentabilidad de las corporaciones privadas como Iberdrola y otras.

Con la privatización vino la segunda fase de destrucción de empleo en las empresas distribuidoras de electricidad. En el caso de Coelba, por ejemplo, distribuidora que pasó a ser controlada por Iberdrola, la plantilla se redujo en más de un 58% de personal, pasando de los 7045 trabajadores que tenía la empresa en el año 1993 a los 2956 que quedaron en 2000 (Gonçalves, 2002: 195-196).

Las condiciones laborales de las y los empleados de las empresas de distribución de electricidad privatizadas han empeorado sustancialmente, según los análisis de los expertos (Gonçalves, 2002; Vainer, 2012; Bermann, 2012b; Seva, 2012b) y de los dirigentes sindicales (De Sousa, 2012; Fiorio, 2012). Por una parte, se incrementó la tasa de explotación. En la empresa Coelba, por ejemplo, Iberdrola aumentó la tasa de explotación triplicando el número de consumidores por trabajador (de 296 consumidores por empleado a 980) y multiplicando también por tres la energía vendida por cada trabajador (de 986 megavatios hora a 3359 megavatios hora) (Gonçalves, 2002: 196-198).

Otro mecanismo que ha precarizado radicalmente las condiciones laborales ha sido la tercerización o subcontratación de un parte de los servicios. Celso de Sousa, representante del sindicato de eléctricos en São Paulo precisa que la tercerización supuso una reducción salarial y la supresión de los derechos tradicionales (asistencia médica, participación en beneficios de la empresa, cesta de alimentación, ...) (De Sousa, 2012). En el caso de Coelba, Celpe y Cosern, las tres empresas que controla Iberdrola a través de su participación en el consorcio Neonergía, el porcentaje de subcontratación se sitúa en el 50%. Una de las consecuencias graves ha sido el aumento de accidentes laborales (Fiorio, 2012).

En el subsector de generación también se producen impactos en las condiciones laborales, fundamentalmente durante la construcción de las grandes hidroeléctricas, donde las condiciones laborales son muy deficientes (horarios prolongados, pocos días de descanso, mala alimentación), como asegura Atenagoras Lopes (2012), coordinador nacional del sector de la construcción del sindicato Conlutas.

Un caso paradigmático es nuestro estudio de caso: la hidroeléctrica de Belo Monte. Desde principios de 2012 se han producido diferentes huelgas para enfrentar medidas empresariales que habían supuesto un retroceso en algunos derechos. Uno de los retrocesos ha sido la supresión del pago por transporte, que suponía alrededor del 30% del salario (Sposati, 2012).¹⁰ Además, no se les está pagando las horas extras, como confirma un

10. «A comienzos de marzo les quitaron la hora pagada de transporte al trabajo, que es un 1/3 del salario. Para quien

ex trabajador: «trabajamos oficialmente siete horas y media pero en realidad nos obligan a trabajar nueve horas y media [...] las dos horas diarias de más no las pagan» (Teixeira, 2012). Una de las medidas más conflictivas de supresión de derechos laborales ha sido la duplicación de los meses de espera para poder ir a visitar a las familias, en el caso de los trabajadores que son de fuera. «Cada 90 días el operario que viene de lejos tenía derecho a cinco días libres para ir a visitar a su familia, pero la empresa lo suspendió y fijó que fuera cada 180 días [...] hubo una revuelta muy grande» (Lopes, 2012). Lo habitual en Brasil es que en este tipo de obras se otorgue licencia cada tres meses para ir a visitar a la familia por lo que están quebrantando un derecho que está siendo aplicado en decenas de construcciones en todo el país (Sposati, 2012).

Un gran impacto en materia laboral tiene que ver con la falta real de libertad sindical, debido a la estructura mafiosa de sindicatos pro-patronales que opera en Belo Monte y en muchas partes del país, según denuncia Lopes (2012). El sindicato ofrece empleo a cambio de dinero y exige a los trabajadores que no reivindiquen mejoras laborales porque si no serán expulsados. De esta manera, la empresa pretende asegurarse la sumisión y la paz social. A este tipo de sindicato se le llama «sindicato pelego». «En Belo Monte el sindicato te obliga a pagarle una parte de tu salario pero sin derecho a afiliación [...] pagan como si fueran afiliados¹¹ pero en realidad no son y por eso no tiene derecho a votar en las elecciones del sindicato [...] no tienen ni 300 afiliados en todo el Estado de Pará y hay más de 30.000 operarios del sector en todo el Estado»¹² (Lopes, 2012).

Usuarios. A pesar de que la retórica favorable a la privatización aseguró que las y los usuarios se beneficiarían de la inserción empresarial en el subsector de la distribución, el resultado fue justamente a la inversa. En primer lugar, la entrega del servicio a manos privadas provocó un aumento de precios absolutamente desproporcionado, como señalan todos los expertos (Gonçalves, 2007; Sauer, 2012; Vainer, 2012; Bermann, 2012b; Seva, 2012b) y los diversos movimientos ciudadanos consultados: MAB (Sollero y Nadaletti, 2012) y Asociación de Usuarios de São Paulo (Yoshida, 2012). Según datos del MAB, en algunos estados el aumento de las tarifas en los últimos 15 años ha llegado a ser del 400% y a día de hoy, Brasil tiene la quinta tarifa más cara del mundo (MAB, 2010: 8). Si comparamos con EE.UU., la tarifa es el doble, a pesar de que Brasil tiene un ingreso *per cápita* cuatro veces menor.

Comunidad. Los mayores impactos comunitarios en Brasil están asociados fundamentalmente a la construcción de grandes hidroeléctricas. La construcción de grandes presas provoca, en primer lugar, grandes desplazamientos de población, que tiene que abandonar por la fuerza su lugar de residencia. El Movimiento de apoyo a los y las afectadas por las presas (MAB), afirma que a lo largo de las últimas décadas alrededor de un millón de

manda dinero a su familia es una cantidad muy importante» (Sposati, 2012).

11. Para el sindicato oficial las cuotas obligatorias sin derecho a afiliación son un gran negocio, ya que obtienen cientos de miles de reales al año (Sposati, 2012).

12. En este contexto de estructura sindical mafiosa, otros sindicatos no tienen apenas opción de trabajar con los operarios, como denuncia el sindicato Conlutas: «no tenemos acceso al cantero, no nos dejan entrar, nadie puede ir dentro de la obra» (Travesso, 2012).

personas en Brasil se han visto obligadas a desplazarse debido a la construcción de centrales hidroeléctricas. Aseguran que de cada 100 familias desplazadas, 70 no han recibido ningún tipo de indemnización por parte de las autoridades (MAB, 2010: 17).

El caso de la hidroeléctrica de Belo Monte es muy significativo. La construcción de la que será la tercera presa más grande del mundo va a provocar impactos comunitarios sumamente graves: el desplazamiento de más de 20.000 personas (Berman, 2012b); el deterioro del modelo de vida de agricultores y pescadores artesanales alrededor del río Xingu, debido al desvío del cauce (Sevá, 2012); la masificación por la llegada masiva de personas de otros municipios y regiones en busca de trabajo¹³ (Berman, 2012a: 8) y el consiguiente colapso de los servicios de salud (Da Costa, 2012); el aumento de la inseguridad, los robos y las agresiones a mujeres (Melo, 2012); y el crecimiento de la prostitución en una comarca de alta precariedad social (Oliveira, 2012).

Pueblos indígenas. Iberdrola también ha sido señalada como responsable de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Nuestro estudio de caso en Belo Monte brinda datos muy relevantes. Norte Energía, la corporación que lidera la obra, ha sido acusada de impulsar la cooptación de los líderes indígenas, con objeto de neutralizar la resistencia que estaban desarrollando en los últimos años (Seva, 2012a: 30; Claret, 2012; Melo, 2012; Sposati, 2012; Ribeiro, 2012). Cleanton Ribeiro, coordinador del Consejo Indigenista Misionario (CIMI) en Altamira, señala que «hasta 2009 los indios lucharon contra Belo Monte, pero de 2010 en adelante fueron neutralizados y no quieren hablar sobre Belo Monte [...] la cooptación se dio a través de los líderes indígenas [...] los compraron para que luego convencieran a sus bases». La empresa provocó la división entre las comunidades: «dos años atrás había 19 aldeas y hoy tenemos 34, producto de la cooptación y de la división que generaron» (Ribeiro, 2012).¹⁴

Los pueblos indígenas han sido cooptados a través de las mercancías que Norte Energía les entrega mensualmente. Ribeiro apunta que «la empresa reunió a los líderes y prometió que les pagarían 30.000 reales por mes a cada aldea; en realidad no les entregan el dinero sino que cada aldea hace una lista de mercancías, se la entrega al FUNAI (Fundação Nacional Do Índio) y este se la pasa a Norte Energía para que compre [...] los indios no son favorables a Belo Monte, pero callan porque reciben los 30.000 reales». ¹⁵ Les entregan alimentos enlatados y refrescos, por lo que se «está modificando su alimentación». Esto está teniendo impactos en la economía tradicional ya que «están empezando a abandonar sus cultivos». Además, «compraron barcos a motor para todas las aldeas» y mensualmente les entregan combustible (Ribeiro, 2012).¹⁶

13. A mediados de 2012, la población de Altamira, la ciudad más importante cercana a Belo Monte, había aumentado en un par de años de 100.000 habitantes a más de 140.000 (Da Costa, 2012)

14. Antonia Melo (2012) afirma que «están tratando a los indígenas como en la época de 1500 [...] dándoles comida y equipamiento para que se queden callados».

15. Sposati (2012) considera que «no es que los indios quieran a Norte Energía; no quieren a la empresa pero como veían que no se podía parar la obra están intentando sacar un beneficio».

16. Sposati (2012) indica que Norte Energía regaló a los caciques televisiones de plasma, cámaras de fotos, etc., para cooptarlos.

5. Conclusiones

Los impactos que provocan las empresas multinacionales son múltiples, muy diversos y en muchos casos con graves consecuencias para la población afectada. La imagen idílica que algunos estudios cercanos a estas empresas intentan proyectar, se aleja por tanto de manera drástica de la realidad, en la que las corporaciones transnacionales más que como agentes de desarrollo aparecen como responsables directas de importantes vulneraciones de derechos sociales y humanos. Las corporaciones son hoy día, más que nunca, los agentes estratégicos del capitalismo y en consecuencia, las principales responsables de operar en función de los intereses de las elites y en perjuicio de la gran mayoría de la ciudadanía.

Iberdrola, como empresa multinacional, reproduce las lógicas de funcionamiento de las grandes corporaciones y su presencia en Brasil es un buen ejemplo de ello. Hoy día, se ha convertido en una de las multinacionales que mayores beneficios han obtenido del proceso de privatización progresiva del sector eléctrico en Brasil, tanto en el subsector de generación como en el de distribución. Se ha convertido en agente protagonista del proceso de mercantilización de un servicio público básico, lo cual ha traído importantes perjuicios para la ciudadanía, fundamentalmente por el aumento de los precios, colocando a Brasil entre los países con tarifas más altas del mundo. Teniendo en cuenta que Brasil es un territorio sumamente lucrativo para la multinacional, parece claro que el país continuará siendo un lugar estratégico para los negocios de la corporación, también en este marco de modelo neodesarrollista sustentado por el gobierno del PT, en el que las empresas privadas están obteniendo importantes plusvalías en sus negocios compartidos con el Estado.

La red de alianzas que ha ido tejiendo en Brasil gracias a la práctica sistemática del lobby, además de la cooptación directa de autoridades políticas, como lo evidencian los testimonios recogidos en el trabajo de campo, evidencian cada vez con más claridad la subordinación del poder político frente al poder económico. El caso de Belo Monte, donde Iberdrola y el resto de empresas que conforman Norte Energía han llegado incluso a cooptar a la policía de Altamira a través de la financiación de su parque móvil, es un ejemplo paradigmático y extremo del sometimiento a los intereses de la elite económica. En este contexto, la posibilidad de la construcción de la democracia se desvanece porque ésta queda subordinada a la lógica del capital.

La imagen idílica de empresa «verde» que impulsa proyectos de energía renovable y sostenible y que respeta los derechos laborales y los de los pueblos indígenas está cada vez más alejada de la realidad, a pesar del importante gasto en propaganda que la multinacional realiza y del apoyo mediático que le brindan las grandes empresas de comunicación. Las consecuencias ambientales y sociales de proyectos de gran envergadura como el de Belo Monte, evidencian que Iberdrola tiene como principio rector la generación de plusvalía y que el principio de sostenibilidad responde exclusivamente a criterios de orden propagandístico. En un contexto, además, donde la explotación laboral, el desplazamiento de miles de personas y la destrucción de miles de hectáreas no van a suponer ningún tipo de penalización, sino todo lo contrario, es previsible que la multinacional

continúe con una práctica empresarial absolutamente antagónica con los intereses de la gran mayoría de la población.

6. Referencias bibliográficas

- Achbar, Mark y Abbot, Jennifer (2009) *La Corporación*, Documental, ISAAN Entertainment S.L.
- Bermann, Celio (2012a) Las megas obras y los límites de la democracia. El proyecto de la central hidroeléctrica de Belo Monte en la amazonia brasileña, *Energía y Equidad*, nº 2, pp. 5-19.
- (2012b) *Entrevista personal*, 12 de abril de 2012. São Paulo.
- Berraondo, Mikel (2008) Aplicación del derecho o programas de RSC para pueblos indígenas, *Revista de Relaciones Laborales Lan Harremanak*, nº 19, pp. 89-116.
- Bloomberg (2012) Iberdrola ofrece 3400 millones para tomar el control de la brasileña Neenergia, *El País*, 24 de enero de 2012, Madrid.
- Carrión, Jesús y Verger, Toni (2007) Amistades peligrosas: empresas transnacionales, poder político y poder mediático, en AA.VV. *Las empresas transnacionales en la globalización*, Madrid, OMAL.
- CEPAL (2012) La inversión extranjera directa en energía eléctrica en América Latina y el Caribe 2011, en CEPAL, *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile.
- Cinco Días (2011) Iberdrola invertirá en Brasil 3170 millones de euros, *Cinco Días*. 02 de septiembre de 2011.
- Claret, Antonio (2012) *Entrevista personal*, 14 de abril de 2012, Altamira.
- Da Costa, Moises (2012) *Entrevista personal*, 14 de abril de 2012, Altamira.
- De Sousa, Celso (2012) *Entrevista personal*, 13 de abril de 2012, São Paulo.
- Ecologistas en Acción (2004) Grandes hidroeléctricas y energías renovables, en <http://www.ecologistasenaccion.org/article178.html>
- Edizangela (2012) *Entrevista personal*, 20 de abril de 2012, Altamira.
- Expansion (2011) Niegan que Iberdrola haya adquirido el control la brasileña Neoenergía, en *Expansion.com*, 09-12-2011 <http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/12/09/16774672.html>
- Fiorio, Marcelo, et al. (2012) *Entrevista grupal a dirección sindical de empresa Elektro*, 13 de abril de 2012, Campinas.
- Gonçalves, Dorival (2002) *Reestruturação do setor elétrico brasileiro: estratégia de retomada da taxa de acumulação do capital?*, Universidade de São Paulo [Tesis de Maestría en Energía].
- (2007) *Reformas na indústria elétrica brasileira. A disputa pelas fontes e o controle dos excedentes*, Universidade de São Paulo [Tesis doctoral].
- Hernandez Zubizarreta, Juan (2009a) ¿Lex mercatoria o derechos humanos? Los sistemas de control de las empresas transnacionales, en Hernández Zubizarreta, Juan

- y Ramiro, Pedro (eds.) *El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales*, Barcelona, Icaria&Antrazyt.
- (2009b) *Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa*, Bilbao, Hegoa.
- IBERDROLA (2011a) *Informe anual 2010*, IBERDROLA.
- (2011b) *Informe de biodiversidad 2009-2010*, IBERDROLA.
- (2011c) *Cuentas consolidadas 2010*, IBERDROLA.
- (2011d) *Informe de sostenibilidad 2010*, IBERDROLA.
- (2012a) Conócenos. Un modelo industrial de crecimiento en defensa del interés social, <http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCONOCENOS&codCache=13279366570032426>
- (2012b) *Informe de resultados*, Nueve meses de 2011, IBERDROLA.
- ICEX (2011) Iberdrola Ingeniería se adjudica un nuevo contrato nuclear en Brasil, *Club de Exportadores e Inversores*, 07 de julio de 2011. http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4503292,00.html
- Lopes, Atenagoras (2012) *Entrevista personal*, 11 de abril de 2012, São Paulo.
- MAB (2010) *Informe sobre la actuación de la empresa Iberdrola-Neoenergía en Brasil*, São Paulo, Movimento dos Atingidos por Barragens.
- Melo, Antonia (2012) *Entrevista personal*, 18 de abril de 2012, Altamira.
- Oliveira, Adrielis (2012) *Entrevista personal*, 14 de abril de 2012, Altamira.
- Petras, James; Veltmeyer, Henry (2007) *Juicio a las multinacionales. Inversión extranjera e imperialismo*, Madrid, Editorial Popular.
- Policía de Altamira (2012) Informativo policial, Abril 2012, Distribución gratuita, Estado do Pará.
- Ramiro, Pedro y González, Erika (2010) Multinacionales españolas en América Latina: impactos sobre los pueblos indígenas. en Cruz, Alberto *et al. Pueblos originarios en América. Guía introductoria de su situación*, Pamplona, ALDEA, pp. 189-200.
- Ramiro, Pedro (2011) El segundo desembarco: los impactos de las multinacionales españolas en América Latina, en Álvarez, Santiago (coord.). *Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas*, Barcelona, Icaria-Antrazyt (Manuscrito facilitado por el autor antes de la publicación).
- Ribeiro, Cleanton (2012) *Entrevista personal*, 19 de abril de 2012, Altamira.
- Roca, Ramón (2011) Brasil da el visto bueno a Iberdrola para su hidroeléctrica de Teles Pires, *Diario Negocio*, 08 de junio de 2011.
- (2012) Iberdrola inicia su propia maratón de desarrollo eólico en Brasil, *Diario Negocio*, 15 de enero de 2012.
- Sánchez Pérez, Joan-Eugeni (2008) El poder de las empresas multinacionales, *X Coloquio Internacional de Geocrítica. Diez años de cambios en el mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008*, Barcelona 26-30 de mayo de 2008, Universidad de Barcelona.
- Sastre, Manuel (2011) La inversión extranjera directa española en el modelo de desarrollo brasileño, *Informes OMAL 5/2011*, Madrid. OMAL.

- Sauer, Ildo *et al.* (2011) *Energía, recursos minerales e desenvolvimento*, São Paulo [Manuscrito facilitado por el autor].
- Sauer, Ildo (2012) *Entrevista personal*, 10 de abril de 2012, São Paulo.
- Seva, Oswaldo (2012a) Belo Monte de mentiras! A historia nada exemplar dos projetos hidreletricos no maravilhoso rio Xingu, inventados pelos mafiosos e herdeiros da ditadura militar [Manuscrito facilitado por el autor].
- (2012b) *Entrevista personal*, 14 de abril de 2012, Campinas.
- Sollero, Gabriel y Nadaletti, Cristiane (2012) *Entrevista personal*, 13 de abril de 2012, São Paulo.
- Sposati, Rui (2012) *Entrevista personal*, 18 de abril de 2012, Altamira.
- Teitelbaum, Alejandro (2010) *La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo*, Barcelona, Icaria-Antrazyt.
- Teixeira, Francinildo (2012) *Entrevista personal*, 19 de abril de 2012, Altamira.
- Travesso, Dirceu (2012) *Entrevista personal*, 11 de abril de 2012, São Paulo.
- Uharte, Luis Miguel (2005) Política social y democracia: un nuevo paradigma, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 11, nº 3, pp. 93-114.
- (2012) *Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y en Brasil*, Madrid, Editorial 2015 y más.
- Vainer, Carlos (2012) *Entrevista personal*, 04 de abril de 2012, Rio de Janeiro.
- Vargas, Fabio (2012) *Entrevista personal*, 14 de abril de 2012, Altamira.
- Yoshida, Miguel (2012) *Entrevista personal*, 12 de abril de 2012, São Paulo.
- Zabalo, Patxi (2007) El papel de las multinacionales en la economía globalizada, en AA.VV. *Las empresas transnacionales en la globalización*, Madrid, OMAL.

AGRADECIMIENTOS • ACKNOWLEDGMENTS

El presente artículo es fruto del proyecto de investigación titulado 'Estudio de las empresas multinacionales de ámbito vasco', financiado por la Fundación Habitafrica y que fue dirigido por el profesor-investigador de la Universidad del País Vasco, Luis Miguel Uharte Pozas en el año 2012. La investigación culminó con la publicación del libro 'Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y en Brasil' y contó con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este artículo es una adaptación a formato artículo de revista académica, del capítulo 7 del citado libro, escrito por el mismo autor.

PROCESO EDITORIAL • EDITORIAL PROCESS INFO

Recibido: 19/03/2014 Aceptado: 02/11/2014

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO • HOW TO CITE THIS PAPER

Uharte Pozas, Luis Miguel (2015) Iberdrola en Brasil: impactos múltiples de una multinacional eléctrica, *Revista de Paz y Conflictos*, Vol. 8, nº 1, pp. 41-62.

SOBRE EL AUTOR • ABOUT THE AUTHOR

Luis Miguel Uharte Pozas. Doctor en Ciencias Sociales (Estudios Latinoamericanos) por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor del departamento de Antropología Social de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).